

Colombia

Axel Rojas Martínez

■ Doi: 10.54871/ca25es4b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno de los Estados nacionales y en los procesos comunitarios instituyentes, teniendo como tres vertientes más importantes las políticas de identidad, las políticas de reconocimiento y las políticas de pueblo o pueblos en movimiento?

Axel Rojas Martínez: Para comenzar, creo que, en el caso colombiano, como en todos los casos nacionales, enfrentamos dificultades particulares para hacer un análisis como el que se nos propone. Quiero mencionar dos asuntos para comenzar. El primero, que ya fue tocado inicialmente por las colegas que me precedieron, es el uso de la noción misma de “estallido” para pensar estos fenómenos, estos procesos de movilización, estas dinámicas políticas recientes, en el contexto latinoamericano, por varias razones. Esta metáfora del estallido muchas veces da la idea de algo que con mucha fuerza aparece en un momento determinado y luego pareciera ser que se reduce a cenizas o que, digamos, podría dejar incluso destrucción. No sabemos cómo esa fuerza transformadora repercute hacia otros fenómenos nuevos y cuáles son sus incidencias hacia el futuro. En Colombia, de manera más común, se le llama estallido no a las

movilizaciones de 2018 y 2019, sino a las de 2021, lo cual muestra algunas de las particularidades del caso colombiano.

Lo segundo está relacionado con lo anterior. Estos fenómenos, esta emergencia de procesos de movilización, si se quiere llamar de otra manera, nos obliga a pensar en coyunturas que normalmente son de más larga duración. Y entonces también tenemos la dificultad de establecer los criterios con los que fijaremos la coyuntura. Yo voy a empezar un poco por el presente y voy a tratar de ir hacia una coyuntura de mediano plazo ubicada en los noventa, para mirar lo que está sucediendo o por lo menos la interpretación que puedo hacer en este momento de lo que ha sucedido en el caso colombiano.

Hace tres días, en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo un saludo a la primera línea, que es, digamos, la manera como se conoce a algunos de los sectores movilizados en el contexto de la movilización de 2021, que tiene que ver con grupos mayoritariamente de jóvenes, pero no exclusivamente, que se organizaron, en términos logísticos y en términos políticos, para responder sobre todo a la fuerte represión estatal que se dio a la movilización de ese momento. Las primeras líneas fueron rápidamente estigmatizadas, señaladas de ser infiltradas o conformadas por grupos armados, resultados de parte de las guerrillas o resultados de quienes no se acogieron a los procesos de negociación en el acuerdo de paz de 2016. Se puede decir que se utilizaron como un signifiante bastante flexible para estigmatizar, a su vez, otras fuerzas u otras posturas políticas.

Lo que quiero señalar es que uno de los efectos de estos estallidos de 2021 sigue siendo el debate sobre el lugar de la movilización ocurrida en el contexto actual, en el que Colombia tiene por primera vez un gobierno al que se llama de izquierda. Insisto en esta precisión de que “se llama de izquierda”, ya que gran parte del proyecto político de Gustavo Petro, como él mismo ha expresado en algunas ocasiones, se inclina más hacia un modelo de capitalismo progresista o algo similar, que está más cerca de las ideas liberales de la segunda mitad del siglo XX, que de ser estrictamente un proyecto de

izquierda. Podríamos decir que es la izquierda realmente existente en un contexto como el colombiano.

Ese es el momento en el que estamos, un momento en el que, además, la semana anterior el gobierno –o el presidente– dio por rota la coalición que es el Pacto Histórico que lo llevó a la presidencia, y de la cual participaron varios partidos políticos más tradicionales. Y además de eso muchos de ellos cercanos al centro, pero algunos de ellos bastante de derecha, como el Partido Conservador, uno de los partidos más tradicionales y más de derecha en la historia política nacional. Estamos en un momento muy particular en el que la política se centra en la discusión sobre la participación y la representación electoral. El nuevo gobierno, considerado de izquierda, está a punto de cumplir un año, y el estallido social es un elemento que se utiliza para legitimar su llegada al poder. Se están buscando políticas que puedan ser gestionadas ante el Congreso de la República e incorporadas en el Plan de Desarrollo.

A partir de esta breve descripción del contexto actual, quiero mencionar que, a mi juicio, para entender lo que sucedió en 2021, es necesario ir más atrás. En primer lugar, en 2021, y casi durante un año, esto es muy interesante, hubo un conjunto de movilizaciones en la calle, algunas de ellas, en vías, entre ciudades aquí llamadas intermunicipales o interdepartamentales. Una serie de movilizaciones numerosas que pocas veces, o tal vez como nunca, habían sucedido en el país. Esas movilizaciones llegaron a ser cerca de mil movilizaciones en la mayor parte de los departamentos y municipios del país, y duraron casi un año. Algunas de ellas fueron movilizaciones que duraban uno o dos días; otras llevaron a la conformación de lo que se llamó “Puntos de resistencia”, una especie de barricadas localizadas en ciertos sectores de la ciudad, teniendo en Cali una de las expresiones más radicales y fuertes. Entonces, ¿qué características tenían estas movilizaciones? En primer lugar, fueron numerosas y masivas. Unas movilizaciones con una muy alta participación de jóvenes. Esto tiene un antecedente que mencionaré después, relacionado con las movilizaciones de 2018

y 2019 en Colombia que fueron fundamentalmente movilizaciones estudiantiles, no exclusivamente, pero las más masivas y notorias sí lo fueron.

Aunque el proceso de movilización ha estado presente a lo largo de la historia, al menos de parte del movimiento indígena desde finales de los años noventa hasta la actualidad, la participación de los jóvenes está vinculada a esta juventud que ya se movilizó en 2018 y 2019. Esta juventud, principalmente universitaria, estaba haciendo demandas relacionadas mayormente con la educación superior, pero también atrajo a otros sectores de jóvenes urbanos, especialmente a aquellos marginados y empobrecidos, de los cuales gran parte no estaban vinculados a organizaciones formales.

Entonces, esto presentó un gran desafío para la movilización: la posibilidad de construir un “nosotros”, ya que este no estaba predefinido. Se trataba de una movilización en la que no todos necesariamente estaban representados por organizaciones establecidas, sino que en algunos casos eran agrupaciones ya existentes, como organizaciones sociales, comunitarias, colectivos de género, de derechos humanos, entre otros. También por organizaciones campesinas, organizaciones sindicales y organizaciones indígenas. Pero un sector muy amplio de quienes se movilaron no pertenecía formalmente a ninguna de estas organizaciones. En muchos casos hubo intentos de construir un “nosotros”, pero no siempre fue claro que se lograra. Otro desafío era la posibilidad de construir algún tipo de forma. En este caso, pensamos en la forma del partido como la opción más común. Sin embargo, considerábamos la necesidad de una forma que pudiera aglutinar a todas las fuerzas en movimiento, tanto aquellas ya organizadas alrededor de una estructura previa como aquellas que no lo estaban.

En ese contexto fue fundamental algo que llama mucho la atención y que considero solamente se puede entender bien si miramos el contexto de más larga duración. Se trata de los intentos y avances significativos de hegemonización de la Minga Indígena en todo este proceso. El papel protagónico que tuvieron las organizaciones

indígenas, particularmente el Consejo Regional Indígena del Cauca, en liderar algunos de los procesos de movilización, fue contundente. Tanto así que generó otra reacción muy fuerte dentro del contexto de movilización del año 2021, que fue una reacción armada muy fuerte por parte de civiles que se identificaron a sí mismos como “gente de bien”, es decir, personas de los estratos medios y altos de la población.

Particularmente en ciudades como Cali, estos grupos salieron a la calle armados, muchas veces en asociación con la policía, para reprimir las manifestaciones. Entonces, digamos, eso es lo que se da en 2021, una movilización masiva, no siempre compuesta por organizaciones ya preexistentes, con algunos intentos de liderazgo y de hegemonización por parte de algunos de los actores allí participantes, en ese caso con una visibilidad importante de la Minga Indígena, pero con muchas dificultades para construir un discurso común.

Y eso representa uno de los desafíos para comprender lo que ocurrió en 2021: las movilizaciones. Constantemente se mencionaban nuevas protestas y manifestaciones. Pero no siempre estaba claro cuál era el propósito de esa indignación y esa movilización constante. Entonces, al reflexionar sobre esto, considero necesario abordar varios elementos sobre cómo se desarrolló la coyuntura. La fuerte reacción de la derecha estigmatizó las movilizaciones, tildándolas de estar infiltradas por la guerrilla o por nuevos grupos armados. Esta respuesta armada creó una imagen del enemigo interno personificado en el “vándalo”, un joven anónimo que actuaba colectivamente en forma de hordas. Este lenguaje, aunque no lo considero el más adecuado, reflejaba la narrativa predominante en ese momento, en la que se atacaba a representantes del Estado, policía y funcionarios públicos. Se manifestó también en la demolición de monumentos, estatuas y otros símbolos materiales que representaban el proyecto hegemónico de una burguesía tradicional. Esto incluía héroes coloniales y figuras políticas de la época republicana, entre otros.

Durante este período en 2021, se acercaba el final del mandato presidencial de Iván Duque, que culminaría en 2022. Duque representó el último presidente de un período de giro hacia la derecha radical en Colombia, conocido como el proyecto uribista. Esta radicalización de la derecha no comenzó en 2002 con el gobierno de Uribe, sino que tuvo sus raíces en expresiones armadas como el paramilitarismo desde los años ochenta. Sin embargo, alcanzó su punto álgido con la presidencia de Uribe, que abarcó desde 2002 hasta 2010. Luego viene un gobierno de uno de sus aliados históricos o de sus principales figuras políticas que fue Juan Manuel Santos (2010-2018), pero que orienta, digamos, su gobierno en una dirección distinta, que lleva al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Este giro a la derecha del uribismo es un asunto muy interesante porque muestra cómo se construyen las disputas en torno a varios asuntos. Uno de ellos es el papel del conflicto político armado en Colombia desde los años sesenta, que tuvo una característica particular a partir de 1991 con la hegemonía o el protagonismo destacado de uno de los grupos armados, las FARC. Estas fuerzas guerrilleras fueron el principal referente y el enemigo interno principal, según el discurso de la extrema derecha liderada por Uribe.

El año 1991 marcó una serie de eventos significativos, entre ellos, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que condujo a un cambio constitucional. Además, varios grupos armados activos en ese momento firmaron un acuerdo de paz, lo que resultó en la predominancia de dos grupos principales: las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Las FARC emergieron como protagonistas en las disputas políticas armadas. Esta situación plantea una aparente paradoja. Por un lado, se llevó a cabo un proceso constitucional profundamente democrático, al menos en teoría, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1991. Por otro lado, el gobierno de ese entonces, encabezado por César Gaviria, adoptó políticas profundamente neoliberales, transformando el accionar del Estado y sentando las bases para una reestructuración de la

institucionalidad estatal. Así, mientras se observaba un giro hacia la derecha en el ámbito económico, simultáneamente se promovía un giro hacia la democracia en lo político.

A partir de la nueva Constitución, se observa un giro hacia la derecha radical con el gobierno de Gaviria. La presencia de las FARC es central, porque le permite a esta derecha radical respaldar este discurso profundamente antiizquierda, que a largo plazo comienza a incorporar algunos referentes latinoamericanos como Venezuela, como parte de esa amenaza, no solo a nivel interno sino también externo. Se combinan diversos elementos. En 2001, se observa una profundización del modelo extractivista, que gana fuerza en la segunda década del siglo XXI. Para 2011, cuando se inician las negociaciones de paz con las FARC, parece ser un alivio para ese proceso de radicalización de derecha. En 2016, se firma el acuerdo de paz, y el gobierno de Juan Manuel Santos propone un plebiscito para darle mayor legitimidad a los acuerdos firmados con el grupo guerrillero. El resultado es un desenlace que no se esperaba ni siquiera la derecha que estaba promoviendo el “No” en el plebiscito.

Después de sesenta años de conflicto político armado con las FARC, que en ese momento se consideraba un actor militar muy fuerte, la respuesta de la ciudadanía es no avalar los acuerdos alcanzados en La Habana. A partir de ese momento, en 2016, parece fortalecerse simultáneamente un proyecto electoral de izquierda por primera vez en el país. Lo que uno podría pensar es que el fin de ese enemigo interno, entendido como un grupo armado ilegal asociado tradicionalmente con las luchas de izquierda y que permite la estigmatización de organizaciones sociales que se apartan del centro y de la derecha, abre el campo político. Es decir, la ausencia de las FARC, a pesar del triunfo del “No” en el plebiscito, abre el campo político, permite incorporar ciertas discusiones e incluso permite que se constituyan nuevas subjetividades políticas en torno al reclamo de la izquierda.

Petro no se declara claramente de izquierda o extrema izquierda; nunca se presenta como comunista y rara vez habla de socialismo.

Es más bien un liberal. Sin embargo, dentro del espectro político colombiano, se le considera de izquierda, casi extrema izquierda. Entonces, al abrirse este escenario, también surge un nuevo terreno de discusión. Cuando comienza el gobierno de Duque en 2018, hay condiciones que parecen ofrecer un escenario pesimista. Sin embargo, en el primer año de su mandato, surge una gran movilización estudiantil que logra una adición presupuestal en el Plan de Desarrollo para la Educación Superior. Posteriormente, en 2019, otra gran movilización estudiantil reafirma estas luchas. Esto, antes de la pandemia, genera una renovación dentro de la cultura política nacional. El escenario de la calle, especialmente la lucha urbana, vuelve a ser un escenario posible y asociado a reclamos ubicados en el espectro de la izquierda.

A esto habría que sumar el proceso de crecimiento de una iniciativa indígena que es la minga indígena, que se ha venido transformando como un intento de articulación que tuvo otras iniciativas como el Congreso de los Pueblos, pero que empieza a plantearse ya no solo como minga indígena, sino como minga indígena, social y popular o minga indígena-comunitaria. Lo interesante es que se plantea como un intento de articulación de diferentes sectores sociales en proceso de lucha y que, a mi juicio, ayuda mucho a entender lo que sucedió con el estallido de 2021. Y es que la minga había logrado trasladar la ruralidad indígena a las ciudades a través de diferentes marchas que empezaron a comienzos de 2000 y que se ubicaron en las universidades públicas, sobre todo en Bogotá y Cali, así como en otros lugares del país.

La minga abrió espacios para la discusión con estudiantes y otros sectores, generando condiciones para una importante politización en medio de un contexto profundamente represivo. También generó algunos elementos discursivos. Luego, en el estallido de 2021, emergieron ciertas formas discursivas que incluyen el reclamo por la defensa del territorio, de la vida y una abierta oposición a ciertas posturas de derecha. Incluso se incorporaron algunos elementos de género que no habían sido centrales en las

movilizaciones indígenas históricamente. Creo que estos elementos son fundamentales para entender lo que sucedió en el año 2021, con estos jóvenes urbanos que salieron a la calle. Aunque no pertenecen a la movilización indígena, han aprendido y se han forjado en una cultura política particular, en parte gracias a esas movilizaciones indígenas que ganaron legitimidad después de 1991, con ese giro multiculturalista.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras? ¿Cuáles se pueden encontrar desde dentro y contra el Estado?

Axel Rojas Martínez: Dado que el panorama es tan heterogéneo, es difícil abarcar esa complejidad. Pero digamos que, si uno toma la pregunta y se ubica en esta posibilidad de lucha dentro de y desde el Estado, pues claramente sería la conformación de un proyecto político, que es esta coalición que en 2022 llega como Pacto Histórico y que lleva a la presidencia a Gustavo Petro, y que tiene unos antecedentes desde 2011 aproximadamente. Allí hay un ejemplo claro que logra convocar a una serie de organismos y organizaciones electorales pequeñas, medianas y grandes, unas más cerca del espectro de la izquierda, otras más conservadoras, algunas de centro. Eso es interesante. Se logra aglutinar allí la construcción de una hegemonía en el plano electoral que lleva a la Presidencia a este candidato que se dice de izquierda. Esto es bastante complejo, pero ayuda a responder rápidamente a la pregunta.

Respecto a lo segundo, hay un conjunto de actores que se debaten entre la participación más institucionalizada de la forma partido y otras formas más autónomas de participación. Ahí tenemos el caso de los feminismos, muy heterogéneos y diversos, pero también con mucha fuerza. Hay unas actoras importantes a las que hay que prestarles mucha atención.

Luego están las movilizaciones estudiantiles, que yo creo que son un escenario interesante que no se restringe a los intereses

propiamente del ámbito escolarizado y de la educación, sino que están más conectadas con fuerzas sociales por fuera de la universidad. Eso puede ser tanto bueno como malo. Así lo moralizamos un poco y es en el sentido de que no siempre hay un debate fuerte sobre el papel de la educación y su lugar en el ejercicio de la política o un horizonte crítico desde allí o cosas por el estilo. Pero digamos que es una realidad en términos de cómo veo yo lo que está sucediendo.

Otro fenómeno que es mucho más difícil de analizar porque podría llamarse como una apuesta por la autonomía, es el caso indígena y afrodescendiente, que en alguna medida se viene gestando también dentro de lo campesino por construir formas de gobierno territorializadas. En el caso indígena, con un antecedente que son los territorios de resguardo, que son tierras que fueron delimitadas y asignadas desde la época colonial, al frente de las cuales se encuentra un cabildo indígena que es una figura de autoridad tradicional. A partir de 1991, con el cambio constitucional, estas autoridades indígenas tienen reconocimiento jurídico, constitucional y legal. Reciben recursos del presupuesto nacional, administran justicia, administran territorio y ejercen control sobre el territorio, de tal manera que en la práctica son gobierno. Son una forma de autonomía con una institucionalidad que podríamos llamar de características estatales, una nueva forma de estatalidad si se quiere. Sin embargo, todavía está en proceso y, a veces, encarna esta contradicción de estar en la calle como movimiento social y, al mismo tiempo, ser Estado.

En el caso particular de las poblaciones afrodescendientes del pueblo negro, el tratamiento constitucional y jurídico es distinto, no tiene los mismos alcances, por lo cual no hay territorios legalmente reconocidos, excepto en una región del país. El resto es muy difícil que la ley permita que esto se haga. Además, no reciben recursos del Estado central, por lo que su ejercicio de gobierno tiene características distintas y más limitadas. Por otro lado, en el caso campesino, siguiendo este molde étnico, hay un reclamo en proceso que ha venido avanzando.

Esta heterogeneidad, cuando se junta, constituye una fuerza popular muy importante. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta es que no logra siempre construir un horizonte común. Estamos en un momento en el que uno podría arriesgarse y decir que es posible que estemos en marcha hacia la construcción de un nuevo sujeto popular que aglutine a todas estas fuerzas. Pero también es muy probable que al final haya una profunda fragmentación. Entonces, mejor no hacer futurología con esto.

Tercer interrogante: ¿Bajo qué modos se conforman las agendas geopolíticas en las comunidades políticas de pertenencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, el anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y local, la lucha contra el enfoque estado-céntrico desde movimientos sociales politizados, la democracia y los procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas? Se refiere a las tensiones entre gobiernos progresistas o que se denominan progresistas y la izquierda social, que podría traducirse como lo político instituido y lo social instituyente.

Axel Rojas Martínez: He pensado mucho en esta pregunta porque me parece muy difícil. A riesgo de parecer o de ser políticamente incorrecto, yo creo que la mayor parte de las luchas en Colombia en este momento podrían ser pensadas como luchas liberales y estadocéntricas. Dicho esto, habría que entender que, en el contexto también nacional, ese es el espectro político de izquierda. Las luchas liberales en Colombia son consideradas de izquierda y en algunos casos incluso radicales. Hay que entender que se producen en esa particular relación de fuerzas y con esos significados. Ese es un asunto fundamental.

¿Cómo se articulan estas luchas? A nivel de lo indígena, para retomar algunos de los sujetos ya mencionados, encontramos que hay organizaciones regionales y nacionales, y que las organizaciones regionales, a su vez, tienen subdivisiones que suelen ser zonales. Estas organizaciones tienen un elemento muy interesante, y es

que son asociaciones de autoridades tradicionales, una figura híbrida que, además de eso, se articula fuertemente a los escenarios internacionales de organismos de derechos humanos, sobre todo del ámbito de Naciones Unidas y en redes transnacionales de organizaciones indígenas en el continente y a nivel global. Entonces, eso hace que a veces estos discursos vayan y vengan y que la forma como se configura a nivel nacional tenga unos componentes muy ligados a tradiciones históricas muy propias del contexto colombiano, como la figura del resguardo en términos territoriales y del cabildo en términos de autoridad, pero también al mismo tiempo ciertos discursos sobre calentamiento global y temas ambientales muy de la esfera global de discusión.

Digamos que en el caso indígena y para ir muy rápido en el caso, por ejemplo, también en los debates de género, hay una configuración de las luchas en redes globales, con un peso muy importante de las redes sociales y bastante heterogéneas por ahora. Es decir, no hay un movimiento unificado de género, sino un conjunto de luchas alrededor del género y las diversidades sexuales, etcétera. Pero con articulaciones todavía no del todo sólidas. Bueno, tampoco se sabe si buscan serlo, pero sí, todavía con pocas expresiones aglutinadoras a nivel nacional. Entonces, más bien hay una presencia transversal en relación con otros grupos, en proceso de movilización con otras luchas de otros sectores y en algunos casos luchas específicas planteadas desde el género. Yo creo que, en el caso, por ejemplo, del campesinado, yo veo, tal vez sea desconocimiento, menos articulaciones amplias a nivel internacional, aun cuando sí hay cada vez más intentos de aglutinar las fuerzas campesinas en organizaciones regionales y nacionales.

Ahora, en cuanto a cómo se piensa en términos de pueblo y su relación con la nación, creo que quien logra ese aglutinamiento o articulación sería principalmente el escenario político-electoral. En este caso, el Pacto Histórico ha desempeñado un papel importante como posibilidad de articular estas diversas fuerzas, manteniendo un escenario bastante plural. Sin embargo, hay una cuestión

metodológica que habría que abordar con cuidado, y aún no tengo suficientes elementos para llegar a una conclusión contundente. Se refiere a los discursos y retóricas con los que se constituyen estos procesos de movilización y organizaciones políticas y sociales, y cómo se traducen en prácticas concretas. Desde un punto de vista analítico, podemos entender que no siempre hay una correspondencia directa entre las retóricas y las prácticas políticas de estas fuerzas. Muchas de ellas se declaran contra el neoliberalismo y la globalización, pero en la mayoría de los casos, en la práctica, siguen adoptando posturas inscritas en el campo político que podríamos considerar como liberal o centrista. A pesar de que en el contexto colombiano esto pueda parecer ubicarlo en el extremo izquierdo.

Debate

Pregunta: Con toda esta creatividad, desde la movilización y la generación de estos espacios de pertenencia para no hablar así de identidades esencialistas, una pregunta muy específica: ¿qué tanto de lo que se fundó en términos de la Constituyente abrió el espacio de representación para indígenas? ¿En la actualidad, qué tanto se está conformando esta representación indígena y afrodescendiente? La presencia de Francia Márquez en el gobierno, ¿qué apelación o interpelación tiene frente a las comunidades políticas de pertenencia?

Axel Rojas Martínez: Es bastante interesante, porque fui al 91 para señalarlo como un marcador, un hito para pensar la coyuntura actual. Y es que la Constitución del 91 fue clave para transformar la posibilidad de participación política indígena. El movimiento indígena puede ubicarse mucho más atrás, la conformación de organizaciones contemporáneas inicia en 1971 con antecedentes en momentos históricos anteriores, hasta la colonia. Pero en 1971 comienza ese proceso de movilización y en el 91 se logra una

participación muy fuerte en la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre todo, en términos efectivos, no tanto numéricos, pero sí en términos del espíritu de la Constitución que se plantea allí. Una cosa que garantiza la Constitución es el reconocimiento de las autoridades indígenas, es decir, de los cabildos como autoridades en sus territorios, les asigna recursos y permite un nuevo estatus que se venía ya reclamando por parte de algunos sectores, que era el de ser gobierno y poder hablar con el Gobierno nacional, con el Estado central, de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad, como se ha planteado. En ese sentido, los últimos treinta años, es decir, los posteriores a la Constitución del 91, transforman las posibilidades de participación y fortalecen el sujeto indígena y el imaginario, permean el imaginario político nacional.

Pienso que ese imaginario multiculturalista que se institucionalizó con la Constitución del 91 es fundamental en la política nacional. A partir de entonces, es importante tener en cuenta una cuestión: la población indígena en Colombia es más o menos del 3,5 %. Y el control territorial de ese 3,5 % de la población es de cerca del 25-30 % del territorio nacional. Entonces estamos hablando de un sujeto político que, si lo miramos numéricamente, parecería ser minoritario y por eso sería problemático pensarlo como minoría, porque no reconocería su peso político en el escenario nacional. Ha logrado en los últimos treinta años disputar la hegemonía en el escenario popular. La política popular en Colombia, en gran medida, está siendo hegemonizada por el movimiento indígena que ha logrado construir unos imaginarios, unas retóricas, unas demandas, incluso unas simbologías muy particulares que gozan de amplia legitimidad y que han empezado a ser acogidas por otros sectores políticos organizados. Entonces, creo que es un actor al que debemos tener en mente claramente.

Ahora, por otro lado, estamos hablando en este momento, pareciera paradójico porque quienes tienen una vicepresidenta son los pueblos negros de Colombia, los afrodescendientes. Entonces lo que pasa es que las formas de participación política en ambos casos

han sido distintas. Francia llega a ese lugar de la vicepresidencia por la vía de la participación electoral, en la cual todavía, a nivel nacional, es difícil encontrar una o lograr una amplia legitimidad, un amplio respaldo para los candidatos indígenas. Esto se debe a que, al mismo tiempo que tienen este protagonismo, siguen siendo profundamente estigmatizados como los responsables de prácticas políticas que gran parte de la población, incluidos algunos sectores populares, consideran como nocivas para sus intereses. Por ejemplo, los bloqueos de vías a veces dificultan el transporte, la comunicación, dificultan el abastecimiento de alimentos y otros servicios en las ciudades, etcétera. Entonces, hay una posición ambigua frente a las candidaturas indígenas que no logran encarnar un lugar de lo popular en el sentido electoral. En las luchas populares, el proceso de movilización ocurre de manera distinta y esto es algo que puedo decir aquí, pero de lo cual no tengo muchas más respuestas por el momento. Son dos procesos distintos.

La población indígena en Colombia es alrededor del 3,5 %. La población afrodescendiente está entre el diez y el 20 %, pero su participación política y su visibilidad en el escenario de lo popular es distinta y está más ligada a mecanismos tradicionales como la participación electoral. Entonces son dos tradiciones culturales, dos formas, digamos, de praxis o de cultura política diferentes. Esto tiene que ver con el hecho de que hayan ocupado dos lugares distintos en el diagrama racial de la sociedad colombiana y que están relacionados con las lógicas de la discriminación, el racismo y otras expresiones de subalternización. Para cerrar, considero que es necesario rastrear ambos sectores de manera comparativa, ya que normalmente realizamos ejercicios o estudios centrados en la población indígena o afrodescendiente, o a veces borramos su heterogeneidad. Esto también es un problema al agruparlos bajo la misma categoría étnica y suponer que, debido a su clasificación jurídica en el Estado nacional colombiano, son idénticos. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones es correcta. Por lo tanto, sigue

siendo necesario explorar y comprender qué ocurre en ambos casos.

Pregunta: ¿Cómo evalúa usted las prácticas de organización comunitaria de base en la población indígena y en la afrodescendiente? Ya nos ha hablado de la diferencia en la participación electoral. La impresión que nos ha dado y por la vitalidad que tiene en este decenio el movimiento afrodescendiente, es que había un alto nivel organizativo en los sectores afrodescendientes, que, aunque quizás no se expresa tanto de otras maneras, al menos ahí existía. Entonces, quisiera saber si eso es cierto o es una percepción incorrecta.

Axel Rojas Martínez: Creo que estamos en un momento de especial fortalecimiento de las luchas afrodescendientes o del pueblo negro o los pueblos negros, como están reclamando algunos sectores hoy en día ser reconocidos. Tienen una expresión fuerte en lo electoral y avanzan en los procesos más de organización de base, de manera diferencial. Esto tiene que ver con factores históricos y quiero hacer nuevamente un puente con lo indígena. Históricamente, la población indígena fue sujeto de atención jurídica desde el mismo comienzo del proceso de colonización y ha sido objeto de atención académica desde hace mucho tiempo, con institucionalidades específicas como el indigenismo interamericano a partir de los años cuarenta y, en el caso colombiano, con recursos económicos del Estado nacional a partir de los años noventa.

Lo que quiero decir es que esa fortaleza de este sector de la población no se ha construido en aislamiento, sino que se ha construido en un entramado institucional de luchas y acompañamientos académicos, de producción de una intelectualidad propia y de movilización bastante compleja. En el caso de la población afrodescendiente, hay una cuestión que no se puede olvidar, y es que en Colombia la abolición jurídica de la esclavitud es efectiva a partir del 1 de enero de 1852, es decir, hace apenas un poco más de 170 años. Eso implica que, a partir de ese momento, la población afro

puede empezar a acumular capitales en términos económicos, de propiedad de la tierra, de acceso a la educación, de participación política, lo que implica hacer en un periodo de tiempo, mucho más corto, una larga carrera para posicionar un proyecto político propio en condiciones de libertad. No es que antes no hubiera expresiones de libertad, que las hubo desde el mismo momento de la trata de esclavos, sino en el sentido de construir un proyecto político desde unos intereses propios en una sociedad profundamente racista y excluyente.

Entonces, eso implica la vinculación a partidos políticos a comienzos del siglo XX, la compra y el acceso a las tierras a lo largo de lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, pero también enfrentando profundos procesos de despojo en regiones como la costa continental del Caribe colombiano o en los valles Interandinos, como en el caso del valle del río Cauca. Entonces, en esas condiciones, las posibilidades de construir un proyecto político propio han sido bastante complejas y es allí donde empieza a gestarse en los años ochenta de manera muy fuerte una lucha antirracista que permite, en los años noventa, apuntalar un nuevo proyecto en el que se hace un reclamo de reconocimiento como sujeto étnico.

Y esto no es común en todos los países de la región. A partir de 1991, y luego reglamentado en 1993 con la Ley 70, la población afrodescendiente es reconocida como grupo étnico, aunque con muchas limitaciones. La forma en que se diseñó la ley solo permite que un sector de la población haga reclamos de estos derechos de manera efectiva, mientras que para el otro sector es mucho más difícil. Pero sin entrar en estos detalles jurídicos, lo interesante es que la posibilidad de construir procesos de organización de base ha sido muy compleja, pasando por diferentes momentos y actualmente se encuentra en un proceso de organización alrededor de lo étnico, después de este giro multicultural de los noventa. Esto significa que es una lucha con menos tradición en el tiempo y menos recursos y acompañamiento por parte de instituciones estatales y académicas.

Es difícil establecer una comparación con lo que quería decir ahora. Aun así, en esas condiciones, hay una vicepresidenta negra, lo que muestra que, a pesar de la adversidad, se han logrado consolidar liderazgos y procesos de movilización importantes.

Pregunta: Quiero referirme a un tema muy específico que es el tema de la violencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se abordó este tema en Colombia? Recuerdo una carta donde los estudiantes universitarios condenaban absolutamente la violencia y rechazaban su uso como instrumento de transformación política. Mientras veía esta diferencia con Chile, donde se estaba justificando la violencia, los estudiantes colombianos estaban tomando distancia y rechazando esa vía. Sin embargo, al considerar el contexto colombiano, uno se pregunta de qué estado de derecho estamos hablando, donde el monopolio fáctico y exclusivo de la violencia por parte del Estado no existe. Quizás estoy siendo un poco exagerado, pero en Chile sí existe, al menos hasta el día de hoy, lo que lo hace más problemático. ¿Cómo se abordó el tema de la violencia en Colombia cuando comenzó el estallido social?

Axel Rojas Martínez: Es un tema que fue discutido en algunas ocasiones; en muchos casos, se usó la violencia como una forma de estigmatizar estas movilizaciones populares que ocurrieron en ese momento. La figura del vándalo y la amenaza hacia las instituciones del Estado, las autoridades e incluso la propiedad privada, se convirtió en un eje central del discurso de la derecha, buscando deslegitimar la movilización. Ese fue un elemento central. También hubo reclamos de defensores de derechos humanos y de muchas organizaciones y personas en proceso de movilización en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Hubo desapariciones, muertes y heridos a manos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios de la Policía. Eso también fue otro elemento central. Entonces, aparece el tema, que es el ejercicio de la violencia por parte de la

población movilizadora, y en algunos casos, fue objeto de discusión. Porque hubo sectores que argumentaron que no podíamos reclamar el derecho a la vida y al libre ejercicio de la movilización y el respeto de los derechos humanos si nosotros mismos no éramos capaces de respetar ese derecho a la vida. Sin embargo, así como hubo estas posturas, también hubo casos en los que se planteó que la violencia era el último recurso para quienes se estaban movilizándose frente al uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado. Eso también fue parte de las discusiones.

No creo que se haya logrado posicionar del todo y establecer un cierto consenso en relación con el respeto a la vida, tristemente. Es decir, pienso que habría sido importante y se habrían evitado muchas muertes, heridos y desapariciones de personas, tanto de manifestantes como de quienes representan a la institucionalidad del Estado. Se podrían haber evitado si hubiera existido un cierto acuerdo en torno al respeto y protección de la vida. Sin embargo, eso no sucedió. Fue un tema de disputa constante, ya que se observaron numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza, principalmente por parte del Estado. Esto es especialmente preocupante, dado que se espera que el Estado garantice la institucionalidad, el orden y el respeto a los derechos. Sin embargo, eso no significa que, en mi opinión, estén justificadas otras formas de violencia, como las que se produjeron en el contexto de las movilizaciones en muchos casos. Pero eso es lo que puedo decir: no hubo un consenso al respecto.

Pregunta: ¿Podrías abundar un poco más sobre el rol de las guardias de la Guardia Indígena cimarrona y campesina como una expresión de control territorial muy concreta para interpretar la conciencia autonómica en Colombia de tales comunidades?

Axel Rojas Martínez: Es importante mencionar que las guardias son cuerpos civiles no armados que actúan en defensa de las poblaciones, ya sean indígenas, campesinas o afro. Inicialmente, la

primera vez que aparece una figura similar, o al menos según nuestro conocimiento hasta ahora, fue en los años setenta en el contexto de las movilizaciones campesinas. Luego, se conforma con base en ese modelo dentro de las organizaciones indígenas, unos grupos de alguaciles, una figura dentro del cabildo indígena. Esta estructura de gobierno indígena se encargaba de apoyar procesos de organización, incluyendo asuntos logísticos, pero también algunos asuntos de seguridad.

Sin embargo, debo aclarar que, para algunas personas, esto podría desconocer la ancestralidad de las formas de defensa del territorio. No quiero entrar en ese terreno, pero sí debo señalar que, aunque han existido múltiples formas de defensa del territorio, la forma de las guardias es una forma contemporánea que surge en los setenta. Me refiero no a todas las luchas de defensa territorial, sino a las luchas de defensa territorial bajo el formato de guardia. A finales de los noventa y comienzos de los 2000, se institucionaliza la Guardia Indígena en un contexto en el que la dinámica del conflicto armado estaba generando muchas muertes y agresiones hacia poblaciones indígenas. Entonces, las guardias se constituyen como este cuerpo que busca defender a la población civil, en este caso indígena, frente a los actores armados y, sobre todo, garantizar aspectos como la circulación por los territorios indígenas, evitar la presencia de actores armados, y actuar frente a algunas acciones de agresión, además de acompañar procesos de movilización.

La Guardia tiene un lugar muy importante, no solo en términos del control territorial *in situ* en los territorios indígenas, sino también en las dinámicas de movilización. Es un cuerpo que acompaña las movilizaciones y que defiende a la población y enfrenta a otros actores que intentan agredir en esos espacios. Más adelante, hacia 2013, si ahora no me falla la memoria, hay una primera experiencia de organización afro que se crea en el palenque de San Basilio, un pueblo que conserva una de las dos lenguas criollas, la única basada en lenguas africanas en Colombia, ubicado al norte del país. Este pueblo descende de un antiguo palenque de la época colonial.

Se creó una guardia también con una dinámica similar de protección del territorio en un contexto de violencia ligada al conflicto armado. Posteriormente, se fortalecen las guardias campesinas que fueron las primeras que hubo en términos formales en los años sesenta. Empiezan a retomarse dentro de las organizaciones campesinas con misiones similares.

A medida que van consolidándose, se convierten en cuerpos muy fuertes y organizados que mantienen una presencia en los territorios, evitando que ingresen personas con intereses contrarios al bienestar de la comunidad. Acompañan las acciones de las autoridades, los procesos de movilización y en general cuidan estos territorios estableciendo retenes para controlar la circulación o el ingreso de quienes representan una amenaza. Actúan en defensa de la población en caso de agresiones por parte de actores armados, ya sean guerrillas, paramilitares o fuerzas del Estado. Eso sería un resumen rápido de sus funciones.

Ahora, si nos fijamos, están en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, acompañando el proceso de aprobación del Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno de Gustavo Petro. Esto también tiene un fuerte valor simbólico dentro de las luchas populares, siendo considerados como una encarnación de la resistencia. Han logrado obtener un gran respaldo popular y su himno, una canción con un ritmo bastante pegajoso, ha sido apropiado y reconocido dentro de la política popular de manera amplia.